

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2021-00919-00
DEMANDANTE:	JAIME HUMBERTO VILLADA GARCIA Y MARIA DOLORES VILLADA BEDOYA APODERADO GENARO OLAYA OSORIO golayaosorio@gmail.com
DEMANDADO:	NOTARÍA SEGUNDA DE TULUÁ segundatulua@supernotariado.gov.co REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL notificacionjudicial@registraduria.gov.co CERTICAMARAS TULUÁ contactenos@camaratulua.org
ASUNTO	RECHAZA DEMANDA POR CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL

I. ANTECEDENTES

LA DEMANDA

El señor Jaime Alberto Villada García y María Dolores Villada Bedoya, presentan demanda de reparación directa ante esta Corporación el día 17 de septiembre de 2021, pretendiendo que se haga efectiva la reparación directa y consecuente restablecimiento del derecho que les fuere vulnerado como individuos y como familia por el despojo jurídico de su propiedad.

Como hechos de la demanda se indica que la señora María Dolores Villada García (q.e.p.d), fue propietaria lote del terreno ubicado en Tuluá - Valle del Cauca, en la Cl. 22 #35-66, adquirido mediante contrato de compraventa el día 14 de julio de 2001, elevado a escritura pública No. 1652, corrida en la Notaría Segunda del Círculo de Tuluá, venta registrada a folio de matrícula inmobiliaria 384-11371 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá –Valle. Que la misma fue objeto de suplantación en su identidad ante la Notaría Segunda del Círculo de Tuluá, donde la autoridad encargada de dar fe pública y transparencia de los actos de disposición e identidad, corrió la escritura pública No.316 del 18 de febrero de 2019 a persona diferente de la señora Villada García; escritura que fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá a folio



inmobiliario 384-11371, anotación No. 007 del 21 de febrero de 2019, Radicación 2019-1714, con aprobación biométrica de Certicamaras Tuluá.

Que la señora María Dolores Villada García se enteró de lo anterior a mediados del mes de marzo del mismo año, cuando se presentó a hacer efectivo el pago de impuesto predial y le informaron que se encontraba a paz y salvo por tal concepto, según le informó el oficial de la oficina de planeación municipal de Tuluá, por ende, han sido afectados de forma indirecta en sus derechos inmateriales de la paz y la armonía familiar, la libertad, la dignidad entre otros.

II. CONSIDERACIONES

Como es sabido, la caducidad de la acción es un fenómeno de creación legal, por cuyo efecto, el simple paso del tiempo implica la pérdida de oportunidad para reclamar por vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad del Estado. Así las cosas, tratándose de la acción de reparación directa, como la que aquí se promovió, de conformidad con el artículo 164 del CPACA establece como término de caducidad el plazo de dos (02) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa o a partir del conocimiento del hecho, veamos:

Artículo 164. *Oportunidad para presentar la demanda.* La demanda deberá ser presentada:

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición;

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en la ley 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.



Para computar el plazo de caducidad no basta con la ocurrencia del hecho dañoso, porque se requiere determinar si el interesado advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado participó en tales hechos y que le es imputable el daño, pues si ello no se configura, el término para demandar no se cuenta desde el hecho dañoso, sino desde que se conoció que resultaba procedente la pretensión de reparación directa, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. En suma, la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado es lo que da paso al conteo del término de caducidad de la referida acción indemnizatoria.

CASO CONCRETO

Los señores Jaime Humberto Villada García y María Dolores Villada Bedoya, aduciendo su interés en virtud de su calidad de herederos, por medio de apoderado judicial, presentaron demanda el día 17 de septiembre de 2021, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Notaría Segunda de Tuluá, la Registraduría Nacional del Estado Civil y Certicamaras Tuluá, con el fin de que se les repare por los daños ocasionados con la suplantación de identidad de su madre María Dolores Villada García (q.e.p.d), en la escritura pública No. 316 del 18 de febrero de 2019, mediante la cual se dispuso el traspaso de un lote de terreno que era de propiedad de la mencionada señora en el municipio de Tuluá- Valle, a otra persona diferente.

De los hechos expuestos se evidencia que, teniendo en cuenta la época en que ocurrieron los hechos, esto es, el 18 de febrero de 2019, fecha en la que se inscribió la venta, inicialmente los actores tuvieron oportunidad para presentar la demanda a partir del día siguiente al referido daño hasta dos (02) años después, esto es, 19 de febrero de 2021, tiempo estipulado por la norma para presentar demanda de reparación directa. Sin embargo, se evidencia del escrito de demanda que la señora María Dolores Villada García se enteró del hecho causante del daño¹, a mediados del mes de marzo de 2019 cuando procedió a interponer la denuncia respectiva.

Ahora bien, esta Corporación tomando en cuenta el día 30 de marzo de 2019 como fecha del hecho dañoso para contar el término de dos (02) años, tiempo en el que pudieron acudir a la jurisdicción administrativa, igualmente se encuentra caduca dicha posibilidad habida cuenta de que el término corrió hasta el **31 de marzo de 2021**, presentándose solicitud de audiencia de conciliación el 5 de marzo de 2021, suspendiéndose el termino hasta el 25 de mayo de dicha anualidad, fecha de la constancia, reactivándose el termino hasta el 21 de junio de 2021 para presentar la demanda, sin embargo, evidenciándose que la demanda se presentó el día 17 de septiembre de 2021, tiempo para el cual ya ha operado el fenómeno de la caducidad.

En este sentido, el artículo 169 del CPACA indica:

¹ Sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección "C". C. P. Dr. Enrique Gil Botero. Bogotá, marzo 24 de 2011. Radicación: 05001-2324-000-1996-02181-01(20836). Ver en similar sentido sentencia del 23 de febrero de 2012 con ponencia del Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera y Radicación 76001-23-31-000-2011-00804-01(42141).



“ARTÍCULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

- 1. Cuando hubiere operado la caducidad.*
- 2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.*
- 3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.”*

Así las cosas, como quiera que la demanda se presentó de forma extemporánea, se rechazará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 169 del CPACA, por haber operado la caducidad del medio de control de reparación directa.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

PRIMERO: RECHAZAR la presente demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de reparación Directa por los señores Jaime Alberto Villada García y María Dolores Villada Bedoya en contra de la NOTARÍA SEGUNDA DE TULUÁ, la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y CERTICAMARAS TULUÁ por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Anótese su salida y cancélese su radicación.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes golayaosorio@gmail.com, segundatulua@supernotariado.gov.co, notificacionjudicial@registraduria.gov.co, contactenos@camaratulua.org.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Loa Magistrados,

JHON ERICK CHAVES BRAVO

RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

: 2021-00919-00
: REPARACIÓN DIRECTA
: JAIME HUMBERTO VILLADA GARCIA Y OTRO
: NOTARÍA SEGUNDA DE TULUÁ - REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - CERTICAMARAS TULUÁ



RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado

FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado